



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca

Documentos de Trabajo

ANA NATALUCCI

Los dilemas políticos de los movimientos
sociales: El caso de las organizaciones
kirchneristas (2001-2010)



instituto de iberoamérica
universidad de salamanca

DT 09/2012

Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
Documentos de Trabajo

Autor: Ana Natalucci

Título: Los dilemas políticos de los movimientos sociales: El caso de las organizaciones kirchneristas (2001-2010)

Fecha de publicación: 23/04/2012

ISSN: 1989-905X

Resumen: En Argentina es posible diferenciar dos ciclos de movilización: 1997-2001 y 2002-2006. En el primero se constituyó un ethos participativo destituyente; en el segundo, se incorporó la dimensión instituyente de la política. ¿Qué características asumió ese ethos participativo? ¿Por qué sólo las organizaciones de gramática movimentista pudieron capitalizar los corolarios de la movilización y mantener una intervención capaz de instalar problemas públicos? El argumento central sostiene que ese extrañamiento del carácter instituyente y esa sobreestimación del destituyente responde a: 1) la gramática de las organizaciones; y 2) a la división entre lo social y lo político. La noción de institucionalización que se presenta remite a una mediación entre la sociedad civil y el régimen político, con la capacidad para definir las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política.

Palabras clave: Movimientos sociales; movilización; institucionalización; gramática política; Argentina.

Abstract: In the recent past in Argentina is possible to differentiate two cycles of mobilization: 1997-2001 y 2002-2006. The first is constituted a participatory *destituyente* ethos, in the second to incorporate the instituting dimension of politics. What characteristics assumed that participatory ethos? Why only grammar movimentism organizations to capitalize the corollaries of the mobilization process and maintain a public intervention able to install public problems? The central argument argues that this strangement of character instituting and overestimation of *destituyente* responds: 1) the grammar of the organizations, and 2) the division between social and political. The concept of institutionalization is presented refer to a mediation between civil society and political system, with the capacity to define the forms of participation, mechanisms of representation and legitimation devices that form a political community.

Keywords: Social Movements; mobilization; institucionalization; political grammar; Argentine.



Tabla de Contenidos

I. INTRODUCCIÓN	1
II. LINEAMIENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES	6
II. 1. GRAMÁTICAS POLÍTICAS: REPENSANDO LA DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES	6
II. 2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO PROBLEMA TEÓRICO	9
II. 2. 1. <i>El registro de la movilización</i>	10
II. 2. 2. <i>El registro de los movimientos sociales</i>	12
II. 2. 3. <i>Hacia una definición pragmática de la institucionalización</i>	13
III. CICLOS DE MOVILIZACIÓN Y DILEMAS ORGANIZACIONALES	16
III. 1. LOS COROLARIOS DE LA MOVILIZACIÓN: LA CONFORMACIÓN DE UN ETHOS PARTICIPATIVO DESTITUYENTE.....	21
III. 2) LAS ORGANIZACIONES FRENTE AL DILEMA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN	25
III. 3) LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO KIRCHNERISTA: DEBATES Y TENSIONES	26
III. 4) DE CÓMO LAS ORGANIZACIONES REPENSARON LO SOCIAL Y LO POLÍTICO.....	30
IV. REFLEXIONES FINALES.....	34
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	36

I. Introducción¹

Los movimientos sociales son reconocidos por la literatura especializada como agentes del cambio social, bien porque amplían los horizontes de expectativas (Koselleck 1993; 2001) que definen los márgenes de acción, marcando las posibilidades de intervención delimitadas por las proyecciones y esperanzas que disputan las denominaciones sobre el presente o porque favorecen el involucramiento y compromiso de sectores sociales que hasta entonces no tenían activismo. En ambas posiciones, los movimientos sociales tienen la capacidad de contribuir de un modo decisivo a la ampliación de los espacios de participación.

No obstante este primer consenso en la literatura, el vínculo entre movimientos sociales y cambio social ha sido objeto de controversia. Para la perspectiva funcionalista, estos surgen por las deficiencias del sistema establecido de articulación y agregación de intereses. Según esta visión, si el sistema funcionara “los movimientos sociales desaparecerían o, por lo menos, retrocederían” del espacio público (Kaase 1999). Para la perspectiva conocida como de los “nuevos movimientos sociales”, su desempeño y actualidad reside en su reemplazo de los partidos políticos o los sindicatos. De esta manera, se produjo un corrimiento del factor explicativo –conocido en la jerga epistemológica como *explanans*–: de la clase a la identidad².

¹ Doctora en Ciencias Sociales. Pertenencia institucional: CONICET/IIGG, UBA. Buenos Aires, Argentina. Email: anatalucci@gmail.com.

Este trabajo retoma los principales lineamientos de una investigación mayor que tiene como propósito analizar las transformaciones de la movilización social en el kirchnerismo, especialmente en la relación que las organizaciones han mantenido con el régimen político en lo que suponemos se trata de una recreación de la tradición movimentista de acción colectiva. Esta investigación se desarrolló en el marco del Grupo de Acción Colectiva y Protesta Social, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires y se financió con una beca de posdoctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (CONICET). Vale aclarar que los resultados expuestos no representan necesariamente la opinión del organismo sobre el tema. Quiero agradecer especialmente a la Dra. Flavia Freidenberg, quien me ha dirigido en una pasantía postdoctoral en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca durante los primeros meses de 2011. Esa estancia fue vital para sistematizar los resultados de la investigación mencionada. Asimismo, agradecer a los evaluadores anónimos cuyos comentarios contribuyeron a mejorar este documento.

² Al respecto, véase Touraine (1987), Offe (1988) y Melucci (1994b). Este desplazamiento de la clase a la identidad fue cuestionado por Tilly (1990) al señalar la confusión producida entre acciones y actores. Su planteo apuntaba a precisar a partir de que dimensión se consideraba a un movimiento como tal: por la red de acciones dentro de la cual se constituye la identidad y por lo tanto un movimiento, o el actor entendido como una posición estructural que habilita nuevas demandas y repertorios.

La posición que sostendré en este documento difiere, por lo menos en sus puntos nodales, de ambas visiones. Esta, siguiendo a Pérez (2010: 440), sugiere que aquellos emergen a propósito de “la dislocación de las relaciones clásicas entre estado y sociedad civil con toda su maquinaria concéntrica de mediaciones políticas y funcionales que encontraban en las figuras del trabajador y el ciudadano sus fuentes de legitimidad”. No se trata de la desaparición de los partidos políticos y sindicatos, sino que los cambios producidos en la sociedad civil rearticularon las relaciones entre lo público, lo privado y lo estatal (Pérez 2010).

En este sentido, lejos de apuntalar una dicotomía entre movimientos sociales y otros sujetos colectivos (partidos políticos o sindicatos), se los ubica la perspectiva de un espacio multiorganizacional. Vamos a entender por tal concepto el campo donde organizaciones de movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos coordinan y articulan acciones y estrategias a partir de diferentes conflictos. Como puede observarse no se plantea una teleología partidos-sindicatos-movimientos sociales; sino que cada uno tiene su propia gramática que en tanto reglas combinan y organizan las relaciones entre sí y delimitan ciertas formas de movilización en detrimento de otras.

En relación con el caso argentino, en el pasado reciente es posible diferenciar dos ciclos de movilización³. El primero se extendió entre 1997 y 2001, contó con una fuerza destituyente excepcional al punto de contribuir decididamente a la inestabilidad del régimen político durante 2001, que entre otras cuestiones implicó la renuncia del entonces presidente Fernando De La Rúa y la dificultad de varios dirigentes políticos para afianzarse en tal magistratura en diciembre de ese año (Schuster *et. al.* 2002). Durante ese proceso se consolidó un ethos participativo (Pérez 2010) o un ethos militante (Svampa 2005), con una

³ Entendido como una fase de intensificación de los conflictos con una “rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y una secuencia de interacción intensificada entre disidentes y autoridades” (Tarrow 2004: 202-203).

doble característica: un espíritu destituyente, al mismo tiempo, que renegaba de la dimensión instituyente de la política⁴. Esta fragilidad originaria era reivindicada principalmente por las organizaciones protagonistas del ciclo, cuyas gramáticas políticas (autonomista y clasista), aún con diferencias, compartían una visión monolítica –y negativa– del régimen político. Curiosamente, las organizaciones con una gramática movimentista, de larga data en la cultura política nacional, que tuvieron un protagonismo marginal en dicha movilización, (re) emergieron con fuerza a partir de la reivindicación de esa dimensión instituyente en el segundo ciclo, extendido entre 2002 y 2006.

Esta breve descripción despertó varios interrogantes, a saber: ¿qué características asumió ese ethos participativo, cuáles fueron sus corolarios para el espacio multiorganizacional y dónde residía la reivindicación de lo destituyente, como cuestionamiento al orden instituido? ¿Por qué sólo las organizaciones de gramática movimentista pudieron capitalizar los corolarios del proceso de movilización anterior y mantener una intervención pública capaz de instalar problemas públicos en la agenda social? Ese trastocamiento de los protagonismos ¿Es atribuible exclusivamente a las gramáticas políticas o qué otros factores intervinieron?

El argumento central de este trabajo sostiene que ese extrañamiento del carácter instituyente y la sobreestimación del destituyente, evidenciado en el caso de Argentina, respondió a dos cuestiones: por un lado, a la gramática de las organizaciones que protagonizaron el ciclo de movilización; y, por otro, a una división entre lo social y lo político instaurada durante el neoliberalismo, entendido como un dispositivo ideológico⁵. Poner en debate la dicotomía entre el estatuto instituyente y destituyente de la política supone repensar que noción de institucionalización. La propuesta no es pensarla como la simple cooptación de una fracción o partido político ni tampoco como la mera integración

⁴ Entenderé por dimensión instituyente la capacidad de la práctica política por rutinizar pautas y disposiciones para la acción.

⁵ Es sumamente llamativa la presencia que tenía el par social y político en la discusión de los cientistas sociales en la década de 1980 al momento de reflexionar sobre la situación latinoamericana. Durante la década de 1990, esa discusión quedó totalmente desdibujada. Así lo acreditan los trabajos de Calderón (1986), dos Santos (1987), Calderón y dos Santos (1987, 1988, 1990) y Touraine (1989).

a un gobierno, sino como una mediación entre la sociedad civil y el régimen político (entre lo social y lo político respectivamente), con la potestad para definir las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política (O'Donnell 1993). En otras palabras, el interrogante por la institucionalización implica responder cuáles son los vínculos y los efectos sobre el régimen de un proceso de movilización. El propósito de este recorrido apunta a reponer el carácter instituyente de la política con la complejidad que supone para los sujetos colectivos, sorteando la oscilación entre posturas celebratorias o miserabilistas, vanguardistas o detractoras de los movimientos sociales (Dalton y Kuechler 1999).

Este análisis se estructura de la siguiente manera: 1) exposición de que se entenderá por gramáticas políticas; 2) discusión teórica respecto de cómo se ha pensado el concepto de institucionalización, para proponer luego un enfoque pragmático; y 3) análisis de la movilización en Argentina atendiendo: i) a la descripción de las principales características del ethos participativo constituido en el ciclo de movilización iniciado en 1997 tomando como punto de referencia la dinámica organizativa de sus protagonistas, las organizaciones piqueteras⁶; ii) la caracterización de la trayectoria de las “organizaciones populares” kirchneristas en virtud de una diagnosis compartida sobre el contexto de oportunidades políticas generado por el flamante gobierno; iii) las maneras en que las organizaciones discutieron la dicotomía entre lo social y lo político y como suponían debía darse la relación entre una organización “popular”, movimentista, y el Estado.

El concepto de “gramáticas políticas” es clave por su productividad analítica, dado que permite dilucidar la dinámica de las organizaciones aunando tanto los componentes estratégicos como simbólicos a partir de las reglas que producen acciones⁷. Dicho concepto define las pautas de interacción intersubjetivas –ligando espacio y tiempo– como las

⁶ El tema de las organizaciones piqueteras ha sido suficientemente abordado por los científicos sociales. Una de las discusiones importantes se concentró en torno a la denominación apropiada para referirse a dichas organizaciones. En términos generales, hay un acuerdo en aludir a su doble origen con el fin de no homogeneizar sus diferencias bajo una misma denominación. Este planteo puede encontrarse en: Auyero (2002); Svampa y Pereyra (2003); Delamata (2004); Pereyra, Pérez y Schuster (2008); Massetti (2009) y Natalucci (2011).

⁷ Por cuestiones de espacio no podré explayarme de un modo exhaustivo. Para profundizar sobre esas acepciones como las características que se le atribuyen véase Natalucci (2010).

II. Lineamientos Teóricos-Conceptuales

II. 1. Gramáticas políticas: repensando la dinámica de las organizaciones

Sin dudas, la noción de gramática remite a la obra del filósofo Ludwig Wittgenstein, no obstante es posible diferenciar tres acepciones: “a) estructura motivacional de los sujetos implicados, lo que habilita un enfoque fenomenológico; b) estructura organizativa de los movimientos sociales, en clave de la movilización de recursos y c) performatividad política de la acción, donde el estudio se orienta a una perspectiva pragmatista” (Natalucci 2010). Respecto de la primera, Trom ubica a los motivos como el componente central de las gramáticas; desde su perspectiva, los motivos son “la instancia que liga acción y situación” (2008: 34). El sociólogo francés sostiene que en esas gramáticas se articula una gama de actuaciones con un lenguaje específico, que aportan “un repertorio de argumentos, justificaciones y marcos para la interpretación de las acciones propias y de otros” (Natalucci 2010: 99). Este enfoque presenta como principal inconveniente ciertas imprecisiones acerca de la diferenciación entre gramáticas políticas y de movilización. La segunda acepción – estructura organizativa de los movimientos sociales– alude principalmente a la gramática de movilización en la que incluye modalidades de confrontación con el gobierno y otros sujetos colectivos, estilos organizativos y cuestiones de dinámica cotidiana vinculadas a su construcción interna.

Un problema de rendimiento analítico se vincula con la indiferenciación entre gramáticas políticas y de movilización. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la especificidad de la gramática política? Es posible responder a esta pregunta considerando la tercera acepción mencionada. Desde la perspectiva pragmática, la gramática política excede a la de la movilización ya que la primera no es reductible a las formas o estilos de construcción política de una organización en el sentido de las formas de distribución interna del poder. La gramática política debe entenderse como “un juego de reglas no escritas que delimita, por un lado, las pautas de interacción de los sujetos y, por otro, las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, acciones que se dirijan a cuestionar, transformar o ratificar el orden social” (Natalucci 2010: 100). Esta noción

En esta lógica, cobra presencia un vínculo pedagógico, orientado al fortalecimiento de la “conciencia clasista” a partir de discusiones de tipo ideológico-programático (Delamata 2004; Natalucci 2011). La estructura interna de este tipo de organizaciones –como el Polo Obrero (Partido Obrero), el Movimiento Sin Tierra Teresa Vive (Movimiento Socialista de los Trabajadores) o el Movimiento de Liberación Territorial (PC)– está dispuesta de un modo vertical y jerarquizada, donde los “ascensos” se definen por probados méritos en las luchas partidarias.

Dado que generalmente los conflictos quedan subsumidos en los de clase, las articulaciones con otras organizaciones se ven limitadas por la estrategia general definida por la cúpula partidaria. Incluso los vínculos con los movimientos sociales se ven acotados ya que tienden a reducir la pluralidad que los caracteriza. La confianza teleológica en el destino de la clase obrera restringe los márgenes de acción al momento destituyente de la política, especial para demostrar la veracidad del programa propuesto por la organización. El hecho que estas organizaciones se presenten sistemáticamente en elecciones –de ahí la denominación “concurristas”– es concebida como parte de su táctica de propaganda; en efecto, las coyunturas electorales son propicias para la difusión de su programa político.

Las organizaciones de gramática movimentista conciben la historia en dos etapas: la de resistencia y la ofensiva. Mientras la primera se caracteriza por el retroceso político y económico para los sectores populares, generándose la fragmentación de las organizaciones, en la de “ofensiva” por el acceso a derechos se alienta la articulación interorganizacional con el fin de superar las posturas sectoriales. Esto último es posibilitado por el uso de un lenguaje de derechos. Esta particularidad permite explicar, aunque sea parcialmente, el crecimiento que tienen estas organizaciones en determinadas coyunturas políticas. En el caso argentino, esta gramática se erigió sobre la base del peronismo, y a su vez, con el estado nacional, entendido como el posibilitador de la integración de los sectores populares a la vida política. En la jerga de las organizaciones movimentistas eso es aludido como el “protagonismo creciente de los sectores populares” o, recientemente, en su “empoderamiento”. De ahí que su expectativa sea la construcción de un “movimiento nacional” que impulse un proyecto popular. En este esquema, las organizaciones se arrojan

el rol de intermediarias, de “puentes” entre los sectores populares y el estado (Natalucci 2008; 2011).

Esta lógica apareja el siguiente riesgo: volverse excesivamente dicotómica tensionando el espacio político y produciendo quiebres que pongan en cuestión la continuidad de la comunidad. Su fundamento estatalista apareja las dimensiones instituyente y destituyente de la política; en otras palabras, presume que los procesos se institucionalizan bajo diferentes formas. Estas organizaciones en los momentos “defensivos” cuestionan las políticas que consideran perjudiciales para los sectores que representan, mientras en los “ofensivos” combinan ambas dimensiones, intentando por un lado, materializar en políticas públicas o derechos sus reivindicaciones y por otro, plebiscitar el tratamiento de los asuntos públicos. Esa combinación expresa “una doble dimensión: conflicto y orden” (Rinesi y Vommaro 2007: 460). La movilización es pensada como la condición de posibilidad para impulsar los cambios en el orden social instituido.

II. 2. La institucionalización como problema teórico

En la sección anterior, se comentó la diferencia entre la dimensión instituyente y destituyente de la política. ¿De qué manera y bajo qué conceptos las Ciencias Sociales, específicamente las teorías de la acción colectiva y la movilización social, abordaron esa problemática? En vistas al objetivo de este documento de trabajo de poner en discusión aquella dicotomía, a continuación se repasan las principales perspectivas de ese campo de estudios, en especial aquellas que priorizaron el registro de la movilización o el de los movimientos sociales. Luego se ofrece una nueva conceptualización desde un enfoque pragmático.

III. 2. 1. El registro de la movilización

Olson (1968), y fundamentalmente los referentes la teoría de la movilización de recursos (Oberschall 1973; Mc Carthy y Zald 1977; Jenkins 1994), cuestionaron inicialmente la caracterización de los fenómenos colectivos como anomalías por su desapego institucional⁹ y repusieron una discusión en términos de la racionalidad y los incentivos que entran en juego para la concreción de una acción colectiva. Por su parte, Olson (1968) se preguntó por las motivaciones de la participación individual en una asociación voluntaria. Desde su perspectiva, la expectativa de una situación futura deseada era lo que brindaba a los individuos los motivos para involucrarse en la acción colectiva. A raíz de esta premisa, propuso el dilema del *free rider* para explicar porque los individuos deciden o no involucrarse en acciones colectivas. Sintéticamente, dicho dilema profesaba que frente a una situación de movilización cada individuo evaluaba el estado futuro y los costos que aparejaba llegar a ella. Entonces, la decisión se dirimía según el cálculo entre esos costos y los potenciales beneficios: habría posibilidades que un individuo participara mientras los primeros no excedieran a las ganancias. En definitiva, para Olson, la actuación de un individuo debería ser analizada según la racionalidad estratégica, quitando todo sesgo de irracionalidad al involucramiento en eventos de tipo contencioso.

El dilema del *free rider* encuentra una complejidad mayor si se trata de una organización que cuenta con muchos miembros: en tal caso ¿por qué un individuo participaría si su aporte no tiene un carácter determinante? Contrariamente, para Olson cuando las organizaciones tienen menos miembros, más nítida se vuelve la importancia de la participación individual. En este punto es donde intervienen los incentivos selectivos, recursos materiales o simbólicos que permiten explicar la participación a partir de la disminución de sus costos. En otras palabras, si la asociación voluntaria cuenta con recursos, los costos que cada individuo tiene que aportar son menores, favoreciendo así el compromiso.

⁹ Sintéticamente, estos discutían con la perspectiva de la sociología de masas de Smelser. En su versión funcionalista, esta indagaba sobre los fenómenos colectivos conceptualizándolos como anomalías de un orden político (Pérez y Natalucci 2008). Esta negativa caracterización se asentaba sobre el carácter no institucional de dichos procesos, en un marco donde era necesario que todos los fenómenos contribuyeran o al equilibrio del sistema social.

La teoría de movilización de recursos es deudora de este último planteo, en tanto sostiene que la participación es posible mientras haya organizaciones que movilicen recursos. Esta afirmación acerca de que el involucramiento de una organización en un evento contencioso está posibilitado por sus recursos marcó un quiebre definitivo en cómo se había pensado hasta entonces la acción colectiva. Así se desplazó, por un lado, la atención al desempeño organizacional para comprender procesos de movilización y, por otro, la dimensión de satisfacción/insatisfacción individual a la colectiva (Dalton, Kuechler y Bürklin 1999). El enfoque sostiene que las actividades de las organizaciones no son espontáneas, sino que están organizadas en base a una elección de tipo racional entre intereses compartidos y la posibilidad de contar con los recursos necesarios.

Esta perspectiva, a diferencia de la teoría de los movimientos sociales que se tratará más adelante, hizo hincapié en las continuidades entre el movimiento social y las actuaciones institucionales. Siguiendo a Jenkins, los movimientos sociales son “actores colectivos que luchan por el poder en un determinado contexto institucional” (1994: 9). Es en esta dirección que el movimiento social es considerado como “una prolongación de actuaciones institucionalizadas”. En consonancia con esta posición, Mc Carthy y Zald consideran al movimiento social como un “conjunto de opiniones y creencias de la población que representa preferencias para cambiar algunos elementos de la estructura social y/o la distribución de las recompensas en una sociedad” (1977: 1217-1218. Traducción propia).

El éxito de la movilización se vincula a los factores estratégicos y a las posibilidades abiertas por los procesos políticos; como también por la capacidad de presión al poder político. Desde esta perspectiva, la institucionalización es concebida como una fase del proceso de una organización para incrementar sus recursos de modo tal de favorecer la canalización de sus reclamos.

II. 2. 2. El registro de los movimientos sociales

La perspectiva conocida como Nuevos Movimientos Sociales¹⁰ se constituyó a partir de una serie de intentos explicativos al problema del actor. Investigadores como Touraine (1987; 1989; 1991), Melucci (1980; 1994a; 1994b) y Pizzorno (1994) compartían la preocupación por la emergencia de experiencias organizativas cuyo protagonista ya no era la clase obrera, sino las “luchas encaminadas a la extensión de la ciudadanía” (Melucci 1994b: 155). Para estos, la sociedad se había transformado: ya no eran trabajadores los que desafiaban a la sociedad industrial, sino nuevos sujetos colectivos que exigían el tratamiento de problemas que hasta entonces no tenían vigencia en el debate público como el ecologista, feminista y el pacifismo (Ibarra 2005)¹¹. Era precisamente el actor, la organización lo que debía explicarse.

Consecuentemente, los movimientos desde esta perspectiva son pensados como “un actor colectivo movilizador que, sobre la base de una alta integración simbólica y una escasa especificación de su papel, perseguía una meta” (Raschke 1994: 124). Sus fines se dirigen a introducir cambios en la estructura social, pero sin que afecten la totalidad del sistema. En esta perspectiva, los movimientos están claramente diferenciados de los sindicatos y los partidos políticos; es más, hay una suerte de teleología de protagonismos históricos: partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales (Pérez 2010). En términos de Offe esa linealidad teleológica se manifiesta en sus demandas: los partidos o movimientos liberal burgueses perseguían la libertad frente a los privilegios, los sindicatos o movimiento obrero la justicia social y seguridad económica frente al poder económico; los nuevos movimientos sociales frente a la frustración de la modernidad, “representan causas que parecen desafiar el acomodo con formas convencionales” (1999: 319).

¹⁰ Respecto del atributo “nuevos”, Melucci (1994a) advirtió que al ser un concepto relativo era insuficiente para identificar las singularidades de los fenómenos colectivos. A su entender, a partir de la novedad no podía establecerse un paradigma; el riesgo implicaba la cosificación de los movimientos sociales y su caracterización como personajes “que interpretan su papel en el escenario de la historia” (1994a: 124).

¹¹ Ibarra (2005) alude a los movimientos antiglobalización como novísimos movimientos sociales.

Su potencialidad radica en que se han corrido de las clásicas mediaciones del sistema político. Incluso Melucci advirtió sobre el reduccionismo político que implica que el enfoque se centre en la actuación de los movimientos sociales como actores políticos, ya que se subestimarían “los fines sociales y culturales de la acción colectiva contemporánea” (1994b: 164). Al respecto, postuló que el ámbito de cambio de los movimientos sociales no es el Estado, sino la reconfiguración de pautas de interacción y la producción de nuevos códigos culturales. En este punto radica la principal diferencia con los actores clásicos de la sociedad industrial: los actores de la sociedad posindustrial no se proponen luchas por el reconocimiento de ciudadanía o de instauración de derechos sino de reafirmación identitaria (Melucci 1994a; Pizzorno 1994).

En resumen, por un lado, la movilización se opone a la institucionalización en tanto esta última es concebida unívocamente en términos de integración al sistema político. Por otro, si bien dicha perspectiva admite que la performance de los movimientos puede producir nuevos códigos culturales o de interacción, lo cual supone cierta impronta instituyente, hay una clara restricción del ámbito político como esfera de participación. En esta característica radica la imposibilidad que los nuevos movimientos desarrollen formas institucionales. Dalton, Kuechler y Bürklin sostienen que el estilo político de los movimientos se caracteriza por “quedarse intencionalmente al margen del marco institucional de la administración pública” (1999: 34), priorizando formas de expresión o persuasión como las protestas callejeras.

II. 2. 3. Hacia una definición pragmática de la institucionalización

El concepto de institucionalización puede ser pensado de dos maneras. Siguiendo a Offe puede concebirse como un proceso de “madurez organizativa” (1999: 326), entendiendo por tal el proceso interno que atraviesa una organización: captura de recursos materiales y jurídicos, creciente formalización de roles que permiten diferenciar entre las bases y dirigentes y definición de instancias de tomas de decisiones. Para Offe este proceso de formalización es lo que resuelve el problema de la continuidad del movimiento.

Otra concepción de la institucionalización está orientada a la relación que un movimiento entabla con el sistema político. Por un lado, tanto la teoría de movilización de recursos como la perspectiva del actor entienden que los movimientos emergen a partir de cierta disconformidad con el sistema institucional o auto exclusión del mismo respectivamente. Siguiendo esta línea, sus fines pueden orientarse o bien a la re-introducción y canalización institucional de sus peticiones o bien al cambio parcial en el sistema social. Más allá de las diferencias que pueden visualizarse entre ambas perspectivas, comparten un supuesto, que es el que por otra parte ha permitido ensayar distintos proyectos de síntesis¹²: la teoría del pluralismo competitivo. Su concepción minimalista de la política está guiada por un “modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (Pérez y Natalucci 2008: 83). Así, la política es una especie de juego regido por un sistema de distribución general de recursos donde la “capacidad de poder se justifica en términos de quienes acuerdan o no con aquellas reglas de juego” (2008: 90); quienes presenten desacuerdos con estas reglas “quedan privados de poder” (Pizzorno 1994: 143). Sostener que la política constituye la posibilidad de participar en elecciones, lo es también que se encuentra cristalizada en instituciones, especialmente en el Estado, quedando cautiva de las instancias de representación de intereses. Si la política pertenece exclusivamente al orden de lo estatal/institucional, de fondo, supone una división entre el Estado y la sociedad civil, entre lo político y lo social.

Por otro lado, podría adoptarse una concepción maximalista de la política pensada como la capacidad de actuar. Si así fuera podrían trastocarse los modos en que se ha pensado la relación entre el Estado y la sociedad civil y, en consecuencia, la acción de los movimientos y sus organizaciones. Relacionado con esto, Tapia (2009) postula que debido a las transformaciones de la sociedad se han ampliado los lugares predilectos para la política, sobre todo de la mano de los procesos de ciudadanía. En esta dirección, la sociedad

¹² A mediados de la década de 1990, se realizaron esfuerzos de síntesis, cuyo propósito era la elaboración de marcos de teóricos donde confluyeran los principales conceptos de ambas perspectivas: estructura de oportunidades políticas, marcos interpretativos e identidades. Estos pueden verse en Laraña y Gusfield (1994), Mc Adam, Mc Carthy y Zald (1999) y en el número 69 de la Revista Zona Abierta.

civil es “otro lugar de la política” (2009: 1) es un espacio no estatal, regido por otras pautas, pero un espacio para la política al fin. Al ampliar esta concepción, la institucionalización no queda reducida al espacio de lo estatal. Para Tapia, los movimientos sociales no tienen un lugar específico donde hacer política, por ello pueden transitar la sociedad civil e incluso el estado “con sus críticas, demandas, discursos, prácticas y proyectos” (2009: 1).

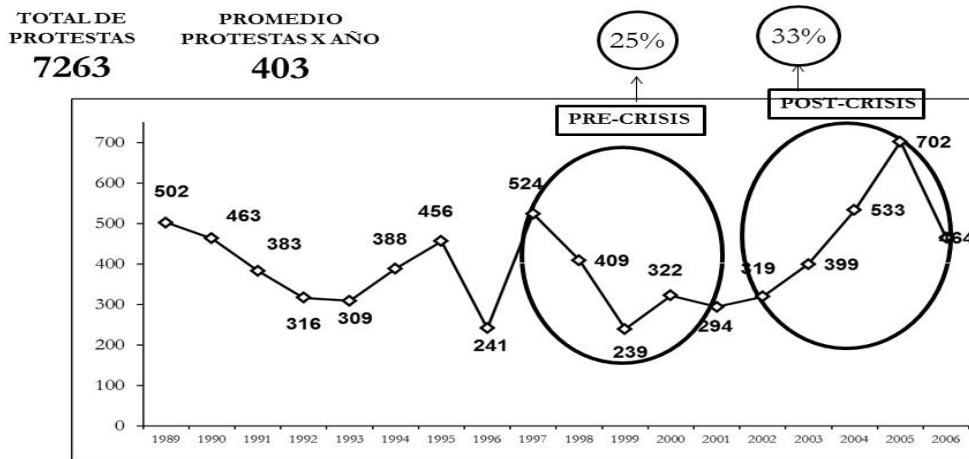
Desde esta perspectiva, la institucionalización constituye un nexo entre estructura y acción, esto es, siguiendo a Giddens (2011), la posibilidad de conformar nuevas pautas comunes que a modo de rutinizaciones organicen los modos en que los sujetos intervienen en las instancias de participación, de representación y de legitimación del orden. De esta manera, se corre la mirada exclusivamente del estado, pensando más bien en los desplazamientos entre este y el ámbito de lo social.

III. Ciclos de movilización y dilemas organizacionales

En la dinámica de la movilización social en la Argentina reciente pueden diferenciarse dos ciclos de movilización: pre-crisis y post-crisis¹³. Como se observa en el Cuadro 1, el primero se extendió entre 1997 y 2001, representando el 25% del total de eventos de protesta (7.263); mientras el segundo comprendió los años 2002-2006, concentrando el 33%¹⁴.

Cuadro 1: Dinámica de la movilización entre 1989 y 2006

Referencias: evolución de las protestas sociales...



Base: Total de protestas (n=7263)

Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

¹³ Los datos que se presentan a continuación fueron tomados de la base de datos elaborada por el Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva, IIGG, UBA en el marco de una investigación mayor que se dedica al estudio de la transformación de la movilización social en la Argentina reciente. Para la elaboración de dicha base se contabilizaron como unidades de análisis los eventos de protestas, entendiendo por tales los acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda que, en general, está referida directa o indirectamente al Estado. Esta noción prioriza dos cuestiones: el carácter contencioso e intencional de cada acontecimiento y la visibilidad pública de estos. En este sentido, no se tuvieron en cuenta aquellas actividades relativas a la vida interna de las organizaciones como reuniones, plenarios, etc. Para el relevamiento se consideró como prescripción metodológica el criterio de unidad de sentido, esto es: “el sentido subjetivo de la acción social, se refiere a los elementos que permiten responder a las preguntas por el quién, el cómo y el para qué o por qué de una acción” (Schuster *et. al.* 2006: 16). Los datos sistematizados en esa base fueron extraídos de los periódicos de mayor circulación nacional: Clarín y La Nación. Los resultados de esta investigación fueron publicados en Schuster *et. al.* (2006) y en Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

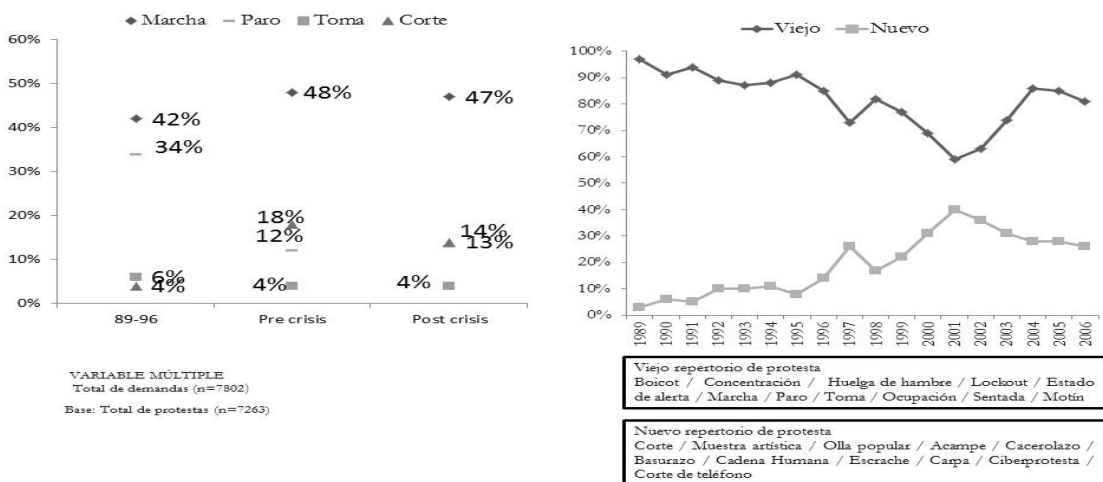
¹⁴ El 42% restante se divide en el período que comprende los años 1989-1996, no siendo significativo ningún subperíodo en particular. A partir de 2006 se mantuvo un nivel estable de movilización pero no llegó a conformarse un ciclo.

El paso de un ciclo al siguiente se produjo en el marco de crisis de legitimidad de 2001, entendida en un sentido weberiano como la pérdida de validez intersubjetiva de las disposiciones que orientan la acción hacia la obediencia frente a un tipo de régimen de acumulación y de dominación política. Los cambios entre un ciclo y otro se produjeron en tres dimensiones: formato, demandas y organizaciones.

Respecto del formato, o en términos más generales, del repertorio de intervención pública, se evidencia una tendencia inversamente proporcional entre los cortes de ruta y los paros/huelgas: hacia 2001 había el doble de cortes de ruta que de paros, revirtiendo la relación de principios de la década del 1990 cuando se producía “un corte de ruta cada siete paros” (Schuster *et. al.* 2006: 60). En términos porcentuales, el corte alcanzó el 18%, mientras que los paros el 12%. Es necesario considerar que no sólo las organizaciones piqueteras realizaban cortes de ruta, sino que ese formato adquirió una modularidad importante siendo apropiado por otras. En el ciclo pos- crisis, se revirtió el tipo de relación entre los cortes de ruta (14%) y los paros (13%) (Armesto, Pereyra y Pérez 2009). Según se observa en el Cuadro 2, esto permite pensar en una renovación de los repertorios de acción de los actores movilizados.

Cuadro 2: Tipo de repertorio según el ciclo de movilización

Referencias: protestas sociales con formato...

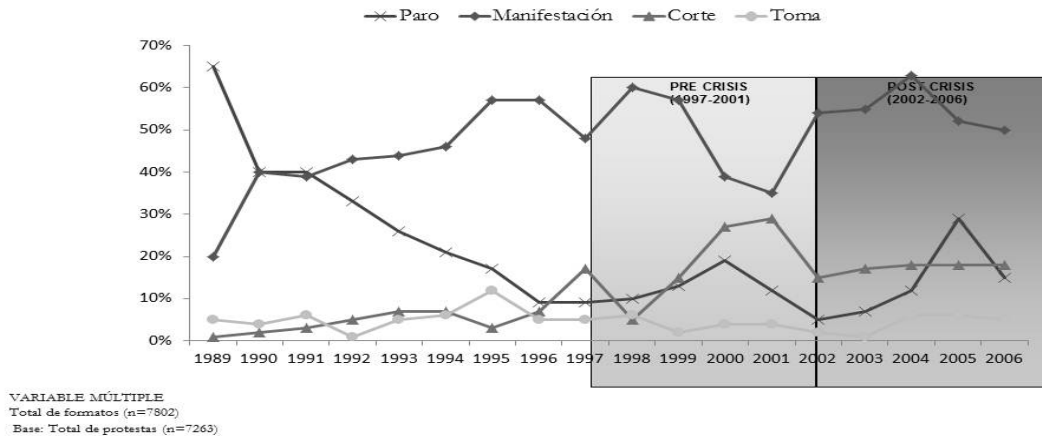


Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009)

Más allá de la renovación en los repertorios, lo cierto es que en ambos ciclos se nota la primacía del formato manifestación con un 48% y 47%, respectivamente.

Cuadro 3: Evolución de los principales formatos

Referencias: protestas sociales con formato...



Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

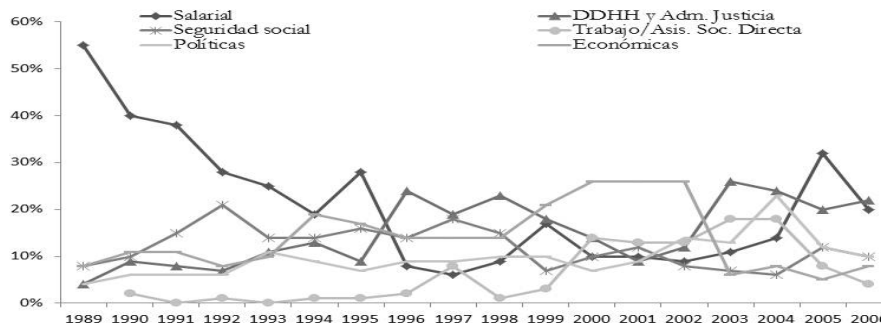
Respecto de las demandas, se observa una creciente heterogeneización en el sentido de una “diversidad mayor en su contenido que se manifiesta en el menor peso relativo de las principales demandas” (Schuster *et. al.* 2006: 60). En el primer ciclo, la salarial (pedidos de aumento, pago de retribución o queja por la disminución o ausencia de pago) tuvo una tendencia decreciente, ubicándose por debajo del 20%; mientras que las de asistencia social directa –aquellas donde se le reclama al Estado la provisión de planes sociales, alimentos, entre otros– y trabajo representaron cerca del 13%.

En términos absolutos tal vez no sea un crecimiento importante, sin embargo antes de 1997 este tipo de demanda no alcanzaba el 1%. En el ciclo de protestas post-crisis, las salariales alcanzaron el 35% con un pico de 40% en 2005; las de asistencia social directa y trabajo descendieron a menos del 10%. Una demanda que sufrió un crecimiento sostenido fue la de derechos humanos y administración de justicia que alcanzó el 19% en el primer ciclo, trepando al 25% en el segundo. Un comportamiento llamativo tuvo la demanda

política (aquella que busca impugnar el orden económico o del régimen imperante): en el ciclo pre-crisis alcanzó el 40%, mientras que en el siguiente descendió a menos del 10%, probablemente por el proceso de normalización institucional pos 2003 (Cheresky 2004).

Cuadro 4: Evolución de las principales demandas (1989-2006)

Referencias: protestas sociales con demandas...

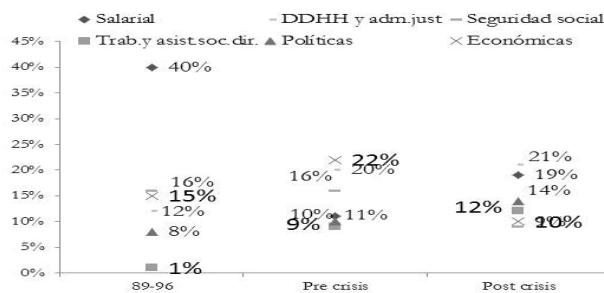


VARIABLE MÚLTIPLE
Total de demandas (n=8971)
Base: Total de protestas (n=7263)

Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

Cuadro 5: Tipos de demandas según ciclos de movilización

Referencias: protestas sociales con demandas...



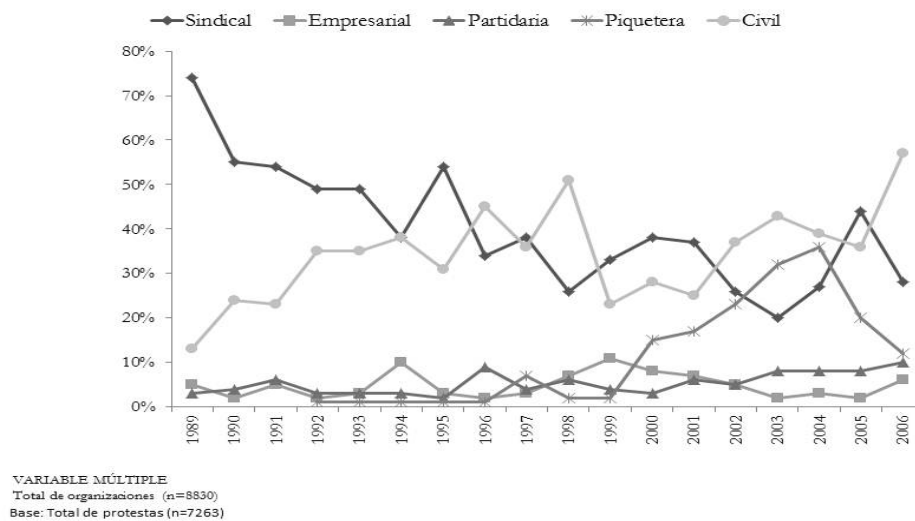
VARIABLE MÚLTIPLE
Total de demandas (n=8971)
Base: Total de protestas (n=7263)

Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

La última dimensión es la de organización. En el primer ciclo, la sindical representaba el 39% de las protestas, la civil 40% y la piquetero 9%; en el pos-crisis, esos porcentajes se modificaron: 43% el civil, 31% el sindical (con un pico significativo en 2005) y 25% el piquetero (Armesto, Pereyra y Pérez 2009).

Cuadro 6: Evolución de la participación de organizaciones en el período 1989-2006

Referencias: protestas sociales con participación de organizaciones...



Fuente: Armesto, Pereyra y Pérez (2009).

El crecimiento sostenido de la organización civil y el descenso de la sindical no implica que esta última no tenga gravitación en el régimen político, sino que ha ido perdiendo el monopolio de la movilización que la caracterizara otrora. Asimismo, respecto de la piquetera se observa una tendencia creciente teniendo como puntos de inflexión 1997; 2002 y 2004; el incremento en el segundo ciclo puede explicarse a partir de los realineamientos y ruptura de grandes organizaciones que provocaron una suerte de diáspora derivando en la proliferación de pequeños colectivos (Pereyra, Pérez y Schuster 2008). De esta manera, lo que tenemos es un espacio multiorganizacional variado, con protagonismos en pugna, que se reactivan según las coyunturas y conflictos.

Las transformaciones en la movilización social, descritas de modo somero en este apartado anterior, aparejaron varios corolarios para el espacio multiorganizacional. A continuación se presentarán las principales mutaciones.

III. 1. Los corolarios de la movilización: la conformación de un ethos participativo destituyente

De acuerdo a los datos expuestos en el apartado anterior, como a las referencias bibliográficas reconocidas, uno de esos corolarios se organizó en torno a la concepción de democracia instalada en 1983 en el marco de la “transición democrática”. En términos de Rinesi, en aquella se resaltaba el componente liberal en detrimento del democrático; se priorizaba el “establecimiento de lazos verticales entre los ciudadanos y las instituciones del Estado a cambio de la garantía mínima de ciertos derechos [en vez de la] participación popular, deliberativa y activa en los asuntos públicos como auspicios del establecimiento de lazos horizontales de los ciudadanos entre sí” (2007: 112). Durante la década de 1990, se profundizó esta tendencia al instalarse un modelo político delegativo, esto es la “concepción y práctica del poder ejecutivo según la cual por medio del sufragio se le delega el derecho de hacer todo lo que le parezca adecuado” (O’Donnell 1993: 261).

Según Rinesi (2007), la conjunción de ambas cuestiones –la sobre presencia del componente liberal sobre el democrático y el modelo delegativo– consolidaron una crisis de representatividad que deterioró los lazos entre representantes y representados. Los formatos de acción directa, como el piquete o el escrache¹⁵, difundidos en el ciclo de movilización pre-crisis, pusieron de manifiesto el rechazo a ese modo delegativo de hacer política al reivindicar la intervención sobre asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Con esos repertorios las organizaciones mostraban su disconformidad con situaciones que

¹⁵ El “escrache” fue utilizado originariamente por organismos de derechos humanos para señalar los domicilios de los responsables del terrorismo de estado impunes por leyes de amnistía, luego por ahorristas para repudiar a los jueces que avalaban la incautación de los ahorros realizados por los bancos durante 2001, y a posteriori por una multiplicidad de organizaciones. En general, suele utilizarse para señalar situaciones de impunidad que por diversos motivos no pueden ser judicializados.

(Svampa 2005: 251). Dicha dinámica contuvo entonces un elemento sumamente emancipador que permitió que los sectores organizados “tomaran la palabra”, se liberaran de aquellos que hablaban en su nombre y se propiciara la construcción de una voluntad política (Rinesi y Vommaro 2007).

Estos tres corolarios constituyeron un ethos participativo que trastocó la dinámica política, cuya principal característica fue su espíritu destituyente. En efecto, su impulso radicaba solamente en cuestionar el orden dado, sin formular propuestas alternativas que sedimentaran uno nuevo. Así en su mayor potencialidad, encontró su deficiencia. Esa era fomentada desde las gramáticas políticas de dichas organizaciones que, aún con diferencias, compartían una visión monolítica del régimen político, por la que o bien preferían no tener ningún tipo de relación –como en el caso de las autónomas– o bien sólo pretendían su destrucción –en el caso de las clasistas–. El estatuto instituyente de la política era rechazado.

Además de esta característica intrínseca a las organizaciones, hay otro factor para resaltar: estas seguían pensando bajo el paradigma neoliberal, con los conceptos que este había instalado. En otras palabras, aquel puede ser pensado no sólo como un modelo de estabilización económica sino fundamentalmente como un dispositivo ideológico, entendiendo por tal “una compleja tecnología de gobierno correlativa a una transformación profunda del régimen social de acumulación en su etapa postfordista” (Pérez 2011: 12) puede sostenerse que implicó también nuevas modalidades de subjetivación. Siguiendo el razonamiento de Pérez, la tecnología neoliberal se orientó a la “racionalización y dinamización de las formas de intervención [estatal] con el propósito de regular a ese nuevo sujeto de gobierno [...] ese complejo espacio de magnitudes en circulación que llamamos sociedad civil” (2011: 13-14).

Esa configuración implicó la exaltación de la separación de la sociedad civil del estado ya presente en el planteo liberal, junto con el pedido de autorregulación y desentendimiento de ese último respecto de sus obligaciones. Conceptos como empoderamiento, autogestión, autoorganización, entre otras, pasaron a ser parte del vocabulario de las organizaciones delimitando a su vez sus prácticas. Estas quedaron entrampadas en la división que el propio

neoliberalismo había establecido entre lo social y lo político. Bajo esta lógica, las organizaciones debían ocuparse de atender las necesidades urgentes que sucedían en los territorios; en tanto la clase política se ocupaba de ordenar las cuestiones vinculadas a las grandes definiciones nacionales. Dicha lógica favoreció la difusión del uso instrumental del Estado por parte de organizaciones que promovían lo destituyente, en el sentido de cuestionar el orden y buscar su destrucción. Su tarea consistía en extraer recursos económicos mientras que socavar las fuentes de legitimidad estatal. Aunque en un primer momento, ese estatuto sirvió para la propagación de la movilización y el cuestionamiento del modelo político delegativo y del económico excluyente; en un segundo se erigió como un serio obstáculo para la continuidad de la comunidad política.

La diferencia entre lo instituyente/destituyente presente en el espacio multiorganizacional, que hasta ese momento sólo había generado rispideces, se desencadenó de modo explícito luego de la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003, provocando su fractura en dos grandes tendencias. Una quedó conformada por las organizaciones opositoras al nuevo gobierno, quienes persistieron en la continuidad de un repertorio beligerante de intervención pública, lo que aparejó el cuestionamiento por parte de sectores que reclamaban volver a cierta normalidad después del torbellino del 2001. En esta tendencia quedaron englobadas las organizaciones con gramáticas autonomista y clasista, que además de oponerse al gobierno, acordaban en la visión monolítica sobre el Estado y el rechazo a cualquier tipo de estabilización del orden político; en definitiva, lo que denominamos la dimensión instituyente de la política como la capacidad para definir las reglas y pautas de acción en una comunidad.

La segunda tendencia se nutrió de organizaciones de gramática movimentista, adherentes a la tradición nacional y popular, que se convocaron a “la reconstrucción del movimiento nacional”. En esta dinámica se constituyó un espacio militante autodefinido como de “kirchnerista”; si bien sus relaciones no fueron fáciles, la lectura compartida del contexto de oportunidades políticas junto con el anhelo de un horizonte relativamente similar contribuyeron a aliviar las tensiones interorganizacionales.

III. 2. Las organizaciones frente al dilema de la institucionalización

¿Por qué organizaciones que habían tenido protagonismo en el ciclo de movilización pre-crisis quedaron progresivamente marginadas de la contienda política, y, a su vez, las movimentistas que hasta entonces habían tenido un desarrollo exiguo y una presencia pública reducida cobraron semejante gravitación pos 2003?

En un apartado anterior se sostuvo que las organizaciones autonomistas y clasistas tuvieron dificultades para entender la complejidad del nuevo ciclo de movilización y que en principio esto se vinculó a su concepción monolítica del régimen político. Por un lado, ya no contaban con la legitimidad de los primeros tiempos, su insistencia en la utilización de formatos beligerantes chocaba con la campaña anti-piquetera impulsada por los medios de comunicación concentrados (Svampa 2005) y sobre todo con la expectativa de normalidad de amplios sectores ciudadanos. Por otro, las autonomistas quedaron descolocadas a partir de cierta recomposición de la autoridad presidencial (Pereyra, Pérez y Schuster 2008), dado que habían promovido el boicot electoral desestimando las elecciones presidenciales de mayo 2003 (Natalucci 2008; 2011).

Las clasistas mantuvieron su política “concurrista”, con una estructura partidaria propia, pero sin que se viera reflejada su presencia callejera en los resultados electorales. Las elecciones de mayo de 2003 aparejaron una primera sorpresa no sólo por la significativa concurrencia electoral, sino por la recomposición del campo político, donde “los ciudadanos no se vieron ya impulsados a sentirse y a manifestarse fuera, sino dentro, de los mecanismos institucionales de la vida política liberal-democrática” (Rinesi y Vommaro 2007: 457).

Ambas cuestiones aparejaron nuevos dilemas para las organizaciones. Primero, sobrevino un momento de desmovilización expectante a la asunción del presidente; seguido del desafío de reposicionarse frente “a un gobierno que construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio apelando a la oposición al modelo neoliberal, que recuperaba buena parte de las demandas presentes hasta el 2003” (Pereyra, Pérez y Schuster 2008: 16). En junio de 2003,

Kirchner convocó a todas las organizaciones, omitiendo sus adscripciones ideológicas, a reuniones en la Casa Rosada. El objetivo era que plantearan sus reclamos mientras el presidente les proponía sumarse al “proyecto nacional”; que en términos prácticos implicaba su incorporación al plantel gubernamental, la articulación de los trabajos territoriales con la definición e implementación de políticas públicas y su retraining callejero.

En este sentido, la asunción de Kirchner implicó un punto de inflexión, con los consecuentes realineamientos organizacionales. Si bien las organizaciones autonomistas y clasistas insistieron un tiempo con la presencia callejera, esta fue desactivándose a partir de la mencionada campaña anti-piquetera y la presión del gobierno nacional. Las autonomistas se replegaron sobre el territorio, dedicándose a autogestionar proyectos productivos, recuperando así su premisa fundacional del cambio social desde lo cotidiano. Las clasistas encontraron nuevos núcleos de conflictividad desde los cuales publicitar su propuesta programática. El mayor debate se produjo entre las organizaciones movimentistas, que con dificultades se propusieron la constitución de un espacio militante kirchnerista.

III. 3. La constitución del espacio kirchnerista: debates y tensiones

Respecto de las características que adquirió el espacio kirchnerista la primera cuestión que hay que considerar es la lectura realizada por las organizaciones, quienes interpretaron las primeras declaraciones –especialmente el discurso de asunción– y gestos del presidente en clave de las tres banderas históricas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Organizaciones con un trabajo territorial acotado (el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita –luego Movimiento Evita–, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Resistir y Vencer, Malón –hasta 2002 ambos integraban el Movimiento Patriótico 20 de Diciembre–) así como las de alcance nacional (Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat –vinculada a la Central de Trabajadores Argentinos– (FTV) y Barrios de Pie –perteneciente al nucleamiento de izquierda nacional Patria Libre, que luego confluyó en Libres del Sur–) se reunieron en sucesivos espacios de coordinación política.

El acuerdo mínimo que habilitaba esta posibilidad era la caracterización relativamente compartida sobre la coyuntura y las oportunidades políticas en pos de constituirse en la base social del kirchnerismo. La intención era conformar un espacio o frente que favoreciera, por un lado, la reconstrucción del movimiento nacional; y por otro, la apertura de la etapa de ofensiva popular, donde se incorporara la dimensión política al trabajo social –propio de la etapa defensiva– que venían desarrollando. En este sentido, las organizaciones discutieron la identificación social o piquetera que les había sido atribuida en la década de 1990, adoptando la de populares. Este esfuerzo de re-denominación puede entenderse en la clave de no quedar encerradas en la lógica de lo social y territorial y poder intervenir políticamente.

En relación con estos objetivos se produjo un debate en torno a la modalidad de construcción interna, reeditándose la discusión setentista entre las opciones movimentista, tendencia y alternativa independiente¹⁶. La primera refería a la reconstrucción del movimiento nacional y a la aceptación del liderazgo de Néstor Kirchner. Su percepción era que se trataba de un gobierno en transición, es decir que el neoliberal había desaparecido, quedando elementos residuales, pero aún no había cobrado forma el popular. Como el antagonista se ubicaba por fuera del kirchnerismo, no se presentaron resquemores en aceptar la confluencia con sectores provenientes del Partido Justicialista (PJ) –desacreditado por los gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y la cara salida del modelo de Convertibilidad durante el gobierno provisional del ex senador Eduardo Duhalde (2002-2003)–. Esta posición era sostenida básicamente por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita.

La tendencia acordaba con los dos primeros puntos planteados por la movimentista (la reconstrucción del movimiento nacional y el liderazgo de Kirchner); su diferencia radicaba en su negativa a participar del Frente para la Victoria junto con al PJ o lo que las

¹⁶ La discusión entre esas tres modalidades se originó en los setenta en el seno del movimiento peronista. Véase la reconstrucción que de ese debate realizó Lanusse (2005), para su reactualización en el kirchnerismo véase Pérez y Natalucci (2010).

organizaciones denominaban la vieja política o pejetismo. Esta posición se fundamentaba en su caracterización de un gobierno en disputa, con el neoliberal aún activo. Por ello, la estrategia de las organizaciones debía apuntar a la construcción de una herramienta política propia que pudiera participar de elecciones y combatir las contradicciones desde el interior del espacio kirchnerista. En general, las organizaciones que promovían la opción tendencista –la principal fue Barrios de Pie¹⁷– condicionaban su apoyo al gobierno según las alianzas que se establecieran.

Por último, se encontraba la alternativa independiente impulsada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). La posición se inclinaba en resistir la subordinación a un partido o coalición, en este sentido podía apoyar las medidas impulsadas por Kirchner, pero sin que esto implicara integrar la fuerza política. No obstante, la reticencia del kirchnerismo –en parte por la presión de la Confederación General del Trabajo (CGT)– de otorgarle la personería gremial dilapidó los acuerdos¹⁸. De todas maneras, como acostumbraba la CTA (Pérez 2008; Armelino 2012), se dejó vía libre para que sus dirigentes constituyeran organizaciones o participaran del espacio kirchnerista. En este marco, Edgardo Depetri dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –principal gremio de CTA– y allegado a Kirchner fundó el Frente Transversal Nacional y Popular (Boyanovsky Bazán 2010; Da Silva 2012).

Con este debate inconcluso, pero decididas a conformar la base social del kirchnerismo que les permitiera participar políticamente del proceso, las organizaciones impulsaron por lo menos dos frentes durante 2004. El primero, el Frente de Organizaciones Populares (FOP) se constituyó en junio a partir de la confluencia del Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD Evita), el Frente Transversal Nacional y Popular, Barrios de Pie

¹⁷ Es necesario informar que Libres del Sur, organización en la que confluyó Barrios de Pie-Patria Libre en 2006, se retiró del espacio kirchnerista cuando Néstor Kirchner decidió asumir la presidencia del PJ en marzo de 2008. (Gómez y Massetti 2009; Natalucci 2011).

¹⁸ Las disputas en torno a este tema nunca han cesado en la CTA, incluso en las últimas elecciones realizadas en septiembre de 2010, y por primera vez desde su constitución en 1992, la lista Germán Abdala se dividió en dos: la encabezada por Hugo Yasky afín al gobierno nacional y al espacio kirchnerista, con relaciones fluidas con la CGT y 2) la de Pablo Micheli, expresamente anti- kirchnerista y con expectativas de construir un espacio propio tomando como ejemplo el PT brasileiro. Véase Armelino (2012).

y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitar (FTV). Una de sus primeras actividades fue la difusión del documento “La hora de los pueblos” donde emplazaban a la construcción del espacio kirchnerista¹⁹. La premisa subyacente a este llamamiento podría resumirse en la siguiente idea: “la resistencia había finalizado, se debía aprovechar la experiencia acumulada y pasar a la fase ofensiva” (Pérez y Natalucci 2010: 112). En pos de este objetivo, el FOP organizó la Mesa Coordinadora por un Nuevo Proyecto Nacional, como estrategia para reunir a dirigentes con militancia en la izquierda peronista, que procedían de organizaciones no peyotistas. En diciembre de 2004 se constituyó el Frente Patria para Todos (FPT), cuyo propósito era impulsar una coalición política que apoyara la política oficial y que al mismo tiempo pudiera presentarse en las elecciones legislativas previstas para 2005 (Natalucci 2008).

Ambas experiencias (el FOP y el FPT) se diluyeron al poco tiempo debido a las disputas internas y a la lógica política general, pues el armado de la coalición y su presentación a elecciones estaban subordinados a la estrategia del propio Kirchner. No obstante, aquellas dejaron huellas en el espacio militante. Como corolario de este proceso, en mayo de 2005 se conformó el Movimiento Evita, que agrupó a las organizaciones movimentistas, y en 2006 el Movimiento Libres del Sur reunió a las alternativistas (Gómez y Massetti 2009; Natalucci 2011). Estos realineamientos terminaron de cobrar forma el 25 de mayo de 2006, en el tercer aniversario del gobierno de Kirchner. Para esta fecha se organizó un acto en la Plaza de Mayo con la consigna “Volvimos” y “Hoy el pueblo sabe de que se trata. Festejemos juntos el día de la patria”, retomando una proclama del peronismo clásico: “el pueblo quiere saber”. Los organizadores calcularon la presencia de 350 mil personas, asistieron las organizaciones “populares”, los intendentes del Conurbano bonaerense, los gobernadores provinciales (sobre todo los que se conocen como de las provincias del noroeste Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa), el PJ, los sindicatos y la CGT. De esta manera, el espacio kirchnerista cobraba forma sobre esas tres vertientes: organizaciones, PJ y CGT.

¹⁹ Este y los documentos que se mencionan en el párrafo pueden encontrarse en Pérez y Natalucci (2012).

Kirchner finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2007, cargo en el que lo sucedió su esposa y compañera de militancia Cristina Fernández de Kirchner. Por primera vez en mucho tiempo un presidente, que había desistido de su reelección, terminaba su mandato con una alta aceptación popular. En este período presidencial, las organizaciones crecieron cuantitativamente y en su despliegue territorial, logrando una expansión nacional; algunos de sus dirigentes integraron las listas legislativas nacionales y provinciales o fueron designados en cargos ejecutivos en distintos niveles de gobierno. Sin embargo, su expectativa de reconstrucción del movimiento nacional, que permitiera sortear la brecha entre lo social y lo político, estaba lejos de satisfacerse; seguían ocupándose de la organización de los sectores populares, sin la pretendida incidencia en el régimen político respecto de la definición de políticas públicas, promoción de leyes, entre otras.

Resumiendo, en el momento originario del espacio kirchnerista se combinaron “los rastros de la experiencia piquetera [con una] redefinición de la relación con el régimen político cifrada en la recreación de una matriz movimentista de participación y movilización” (Pérez y Natalucci 2010: 100). El desafío para el momento de consolidación consistía en avanzar sobre lo político, por lo que la principal discusión giró en términos de cómo traspasar lo social para intervenir políticamente.

III. 4. De cómo las organizaciones repensaron lo social y lo político

El debate entre lo social y lo político tenía presencia en las organizaciones, sin embargo, a partir de las contiendas electorales cobró mayor gravitación²⁰. Esta discusión estaba atravesada por la lectura coyuntural que realizaban a la luz de las dos etapas con que conciben la historia: la defensiva y la ofensiva. El pasaje de la primera a la segunda no sólo se define por las fuerzas políticas sino por el tipo de participación e intervención que las organizaciones tienen en el régimen político. En términos de los dirigentes ese tránsito se

²⁰ Para este planteo se reconstruirá el debate que dieron a partir de entrevistas en profundidad realizadas a sus dirigentes. Estas fueron realizadas por la autora entre 2007 y 2011.

visualiza o bien cuando la salida política contiene a la resistencia, a los movimientos sociales o bien cuando el conflicto se empieza a resolver a favor de los sectores populares²¹.

Ahora bien, ¿qué quiere decir que la propuesta política debe “contener a las organizaciones”? En principio, que los dirigentes ocupen puestos en las listas partidarias y en la estructura burocrática del Estado. Sin embargo, lo principal está relacionado con su expectativa de generación de políticas públicas y de instauración de derechos. Esta posición es formulada en la clave de reivindicación del Estado de Derecho. Es la posibilidad de participación e intervención que las organizaciones conciben ese tránsito entre lo social, como el modo autogestivo de resolución de conflictos y lo político, que ubica al Estado con la capacidad para generar políticas públicas orientadas a la garantía de derechos.

Volviendo a la dinámica de las organizaciones kirchneristas, esa discusión cobró mayor centralidad en determinados momentos; en particular, tres: 1) la distribución de la riqueza, sobre todo a partir del intento fallido del gobierno de aumentar la tasa de exportación a productores agropecuarios; 2) la sanción de la ley de Servicios Audiovisuales, orientada a desmonopolizar los multimedios de comunicación; y 3) la sanción de la ley de “Matrimonio igualitario” que habilita que personas del mismo sexo puedan casarse y gozar de los mismos derechos que hasta se les reconoció a los heterosexuales.

En cada uno de estos momentos, el debate excedió a las organizaciones interpelando a amplios sectores sociales. Como es de esperar, en todos se erigieron diversos antagonistas: en el primero, los sectores nacionales y transnacionales vinculados a los agronegocios, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Nidera, Monsanto, Craghill; en el segundo, los propietarios de multimedios de comunicación como el Grupo Clarín y La Nación; y por último, la Iglesia Católica, Evangélica y Judía que se oponían rotundamente al proyecto, promoviendo el activismo de sus feligreses contra la sanción de la ley.

²¹ Entrevista realizada por la autora al dirigente del Movimiento Evita, junio de 2010, Buenos Aires, Argentina.

De las tres normas, la única que no pudo sancionarse fue la regulación de las retenciones agropecuarias. Si bien la votación se perdió por el voto negativo de Julio Cobos, en ese momento vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores de la Nación según lo estipula la legislación, lo cierto es que esa disputa se había perdido en el debate público. Es decir, las patronales agropecuarias habían recuperado el piquete como modo de intervención pública, instalándose en las principales rutas nacionales cortando el tránsito de personas y mercancías, como acostumbraban hacer los otrora piqueteros. Paralelamente a esta estrategia, construyeron un discurso que reactualizaba el imaginario arraigado en la cultura argentina de asociar el “campo” al desarrollo nacional, por un lado, y cuestionaba la discrecionalidad con que actuaba el poder ejecutivo activando la memoria corta de la crisis de 2001, por el otro.

El gobierno por su parte intentó reeditar la puja entre oligarquía y pueblo, sin mayor éxito. De esta manera, el espacio político se dividió en dos, enfrentando a quienes se encontraban a favor de la medida, y en consecuencia del gobierno, y aquellos que lo hacían en pos de las patronales agropecuarias. La excesiva polarización plasmada en los discursos y movilizaciones callejeras implicó en el corto plazo un significativo desgaste en la imagen del gobierno, así como la ruptura de alianzas, sobre todo de aquellos que se desempeñaban en cargos ejecutivos y legislativos en los niveles nacional y subnacional. En el mediano plazo, los costos fueron aún mayores dado que el Frente para la Victoria perdió las elecciones legislativas nacionales realizadas en junio de 2009, donde el ex presidente Kirchner encabezaba la lista. Este fue un duro revés para el gobierno y para las organizaciones que se sumergieron en un proceso de reflexión interno, con un relativo impacto en sus alineamientos²².

²² Estos realineamientos implicaron el alejamiento de Libres del Sur; no obstante las otras organizaciones mantenían su adhesión al kirchnerismo. FTV, el Frente Transversal, el Movimiento Evita, la Corriente Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre –desprendimientos de Libres del Sur–, Perucas, Corriente Nacional Peronista, Peronismo Militante, el Peronismo 26 de Julio, la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo. Incluso entre 2007 y 2009 se habían conformado organizaciones, algunas a partir de desprendimientos de otras más grandes como La Cámpora, JP Provincia de Buenos Aires, el Colectivo de Comunicación Paco Urondo, la JP Descamisados y el Movimiento Peronista Revolucionario.

Poco después, las organizaciones transmitieron su versión de la derrota electoral: esta no debía adjudicarse a razones externas, sino a las propias deficiencias del kirchnerismo. Es decir, en la incapacidad del gobierno de reconstruir un “proyecto nacional” inclusivo de las mayorías. Su aporte debía dirigirse en ese sentido. A tal fin, una vez más crearon un espacio de articulación; en las vísperas del 17 de octubre de 2010, conocido en la tradición peronista como el Día de la Lealtad, se lanzó la Corriente Nacional de la Militancia. La apuesta era generar un espacio desde el cual se propusieran ejes a profundizar desde el gobierno y posicionar a sus referentes como candidatos genuinos del kirchnerismo en vistas a las elecciones de 2011. La expectativa seguía siendo la misma: que los sectores populares tuvieran representantes y participaran de los procesos de toma de decisiones nacionales²³.

²³ La Corriente no ha podido consolidarse en los términos en que se había creado, si bien las explicaciones exceden este escrito, es necesario remarcar que las organizaciones han demostrado un excesivo apresuramiento en fundar espacios sin que estén justificados por una práctica sostenida. Esto ha dificultado las relaciones interorganizacionales al plantear tensiones internas que desgastan sus dinámicas.

IV. Reflexiones finales

El objetivo de este documento fue indagar en dos cuestiones. Por un lado, el carácter decididamente destituyente que asumió el primer ciclo de movilización y, por otro, porqué en el ciclo abierto post 2003 ambas dimensiones de la política pudieron combinarse. Responder estos interrogantes supuso una doble tarea. Por un lado, la exposición de la noción de gramáticas políticas. Las organizaciones protagonistas del primer ciclo tenían una concepción monolítica del régimen político, las autonomistas rechazando cualquier tipo de interacción en beneficio de la transformación de lo cotidiano; las clasistas remarcando una confianza teleológica en la dinámica de la clase obrera; en ambos casos se desvalorizaba la reivindicación de derechos y establecía falsas dicotomías que contribuyeron a polarizar y fragmentar el espacio multiorganizacional.

Esta posición sobredimensionó la dimensión destituyente, exaltando la acción directa como el quiebre de la autorreferencialidad del sistema político. Las organizaciones movimentistas, protagonistas del segundo ciclo, pudieron combinar la reivindicación de derechos junto con su sesgo plebiscitario, determinantes para la reposición del estatuto instituyente. Respecto de por qué no era posible sostener una intervención meramente destituyente por tiempo indeterminado, hay que considerar que la política implica el cuestionamiento al orden instituido, pero también y de modo inescindible como práctica de transformación requiere de la capacidad propositiva acerca de cómo reorganizar los vínculos que se producen en las sociedades.

A partir de ese planteo, como segunda tarea, se problematizó en torno al concepto de institucionalización. Para ello en un primer momento se lo diferenció del proceso interno que atraviesa cualquier organización para centrarnos en la relación que cada una mantiene con el régimen político. Al respecto, se mencionaron dos enfoques: minimalista o maximalista. El primero fue utilizado de modo recurrente por las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales, donde el proceso de las organizaciones movimentistas ha sido leído como cooptación de una fracción o partido político para forzarlo a integrar el gobierno o bien de sumisión en una estructura mayor eliminando toda diferencia. En un

segundo momento, se propuso de acuerdo a un enfoque pragmático una noción de institucionalización, que sin caer en la determinación de la estructura o de la acción, se oriente a la inteligibilidad de las reglas y pautas que configuran cursos de acción y que permiten su sedimentación en objetos. Así entendida la institucionalización supone una mediación entre la sociedad civil y el régimen político, antes que su taxativa separación, como un vínculo entre lo específicamente social y político que permite el desplazamiento de organizaciones por los diferentes ámbitos.

Esta conceptualización permite capturar la dimensión transformadora de los movimientos en perspectiva histórica y profundamente democrática. Lejos de aplastar el carácter transformador de los movimientos sociales, potencia su impacto político al poner en cuestión las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política. Su potencialidad crítica favorece la apertura de debates e instalación de problemas públicos, la instauración de derechos y el cuestionamiento del orden establecido. No obstante, más allá de los resultados de su intervención, contribuyen decididamente a repensar las mediaciones vigentes. Relacionado con esto, Souza Santos (2006) sostiene que en lo que respecta a los movimientos sociales es necesario comprender los horizontes emancipatorios que recrean, en qué medida participan de la construcción de ideas hegemónicas y los modos en que impulsan la politización de la realidad.

Sin dudas, queda mucho por discutir. El planteo de una alternativa para el abordaje del problema de la institucionalización constituye un esfuerzo en esa dirección. Es menester avanzar con estudios empíricos que permitan complejizar los vínculos entre los ciclos de movilización y los procesos políticos, a partir del esclarecimiento de cómo se producen las transformaciones de las reglas y pautas que rigen las relaciones en la sociedad en un momento histórico específico.

V. Referencias bibliográficas

- Armellino, Martín. “Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”. En Pérez, Germán y Natalucci, Ana. *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 2012.
- Armesto, Melchor, Pereyra, Sebastián y Pérez, Germán. “Cambios y continuidades de la protesta social en Argentina tras la crisis de 2001”, ponencia presentada en el XXVII Congreso de Sociología de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 31 de Agosto al 5 de septiembre de 2009.
- Auyero, Javier. *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*, Buenos Aires: EUDEBA, 2002.
- Boyanovsky Bazán, Christian *El aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos sociales y el kirchnerismo*, Buenos Aires: Sudamericana, 2010.
- Calderón, Fernando (coord.). *Los movimientos sociales ante la crisis*, Buenos Aires: CLASCO y Universidad de Naciones Unidas, 1986.
- Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario (coord.). *Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis*, Buenos Aires: CLASCO, 1987.
- Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario (coord.). *¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? Democratización, modernización y actores sociopolíticos*, Buenos Aires: CLASCO, 1988, vol. 2.
- Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario (coord.). *¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? Democratización, modernización y actores sociopolíticos*, Buenos Aires: CLASCO, 1990, vol. 1.
- Cheresky, Isidoro. “Elecciones fuera de lo común. Las presidenciales y legislativas nacionales del año 2003”. En Cheresky, Isidoro y BlanquerL, Jean-Michel *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*, Rosario: Homo Sapiens, 2004.
- Da Silva, María Laura “*Cooptados por las ideas. El Frente Transversal Nacional y Popular (2003-2011)*”. En Pérez, Germán y Natalucci, Ana. *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 2012.
- Dalton, Russell y Kuechkler, Manfred. “Los nuevos movimientos sociales y el orden político, o la posibilidad de que los cambios producidos preparen una estabilidad a largo plazo”. En Dalton, Russell *et al* (comp.) *Los nuevos movimientos sociales*, Valencia: Alfons el Magnanim, 1999.
- Dalton, Russell, Kuechkler, Manfred y Burklin, Wilhelm. “El reto de los nuevos movimientos”. En Dalton, Russell y Kuechkler, Manfred (comp.) *Los nuevos movimientos sociales*, Valencia: Alfons el Magnanim, 1999.
- Delamata, Gabriela. *Los Barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*, Buenos Aires: EUDEBA, 2004.
- Dos Santos, Mario. *Concertación político social y democratización*, Buenos Aires: CLASCO, 1987.
- Giddens, Anthony. *La constitución de la sociedad*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2011.
- Gómez, Marcelo y Massetti, Astor. *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros*. Buenos Aires: Nueva Trilce, 2009.
- Herrera Gómez, Manuel y Castillo, Antonio. “Generación y transformación de las instituciones sociales: los procesos morfoestáticos y los procesos morfogenéticos”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 2004, N° 107: 49-87.
- Ibarra, Pedro. *Manual de sociedad civil y movimientos sociales*, Madrid: Síntesis, 2005.

Pérez, Germán y Natalucci, Ana. “Estudios sobre movilización y acción colectiva: interés, identidad y sujetos políticos en las nuevas formas de conflictividad social”. En Natalucci, Ana. (ed.) *Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos*, La Plata: Al Margen, 2008.

Pérez, Germán y Natalucci, Ana. “Reflexiones en torno a la matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”. *Revista América Latina Hoy Argentina*, 2010, N° 54: 97-112.

Pérez, Germán y Natalucci, Ana. “Introducción”. En Pérez, Germán y Natalucci, Ana. *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 2012.

Pizzorno, Alessandro. “Identidad e Interés”. *Revista Zona Abierta*, 1994, N° 69: 135-152.

Raschke, Joachim. “Sobre el concepto de movimiento social”. *Revista Zona Abierta*, 1994, N° 69: 121-134.

Rinesi, Eduardo. “Representatividad, legitimidad, hegemonía. Los dilemas de la representación política después del desbarajuste”. En Emiliozzi, Sergio et. al (comps.) *La dinámica de la democracia. Representación, instituciones y ciudadanía en Argentina*, Buenos Aires: Prometeo, 2007.

Rinesi, Eduardo y Vommaro, Gabriel. “Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos”. En RINESI, Eduardo, et al (comps) *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*, Buenos Aires: Prometeo, 2007.

Santos de Souza, Boaventura. *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*, Bogotá: Uniandes, 2006.

Swampa, Maristella. *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires: Taurus, 2005.

Swampa, Maristella y Pereyra, Sebastián. *Entre la ruta y el barrio*, Buenos Aires: Biblos, 2003.

Schuster, Federico, Pérez, Germán y Pereyra, Sebastián (Coords.) *La Trama de la crisis. Modos y formas de protesta a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*, Informe de Coyuntura N° 3, Buenos Aires: IIGG, UBA, 2002. Disponible en: <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/IC/IC3.pdf>.

Schuster, Federico, Pérez, Germán, Pereyra, Sebastián y Armesto, Melchor (Coords.) *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*, Documentos de Trabajo N° 48, Buenos Aires: IIGG, UBA, 2006. Disponible en: <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/dt48.pdf>.

Tapia, Luis. “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política”. *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, Buenos Aires: CLACSO, 2009.

Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza, 2004.

Tilly, Charles. “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”. *Revista Zona Abierta*, 1990, N° 54/55: 167-195.

Touraine, Alain. *El regreso del actor*, Buenos Aires: Eudeba, 1987.

Touraine, Alain. *América Latina. Política y Sociedad*, Madrid: Espasa Calpe, 1989.

Touraine, Alain. *Los movimientos sociales*, Buenos Aires: Almagesto, 1991.

Trom, Danny. “Gramática de la movilización y vocabularios de motivos”. En Natalucci, Ana (ed.) *Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos*, La Plata: Al Margen, 2008. [Original: Grammaire de la mobilisation et vocabularios de motifs. Traducción Vanina Papalini y Georgina Remondino].